

INTA: CAMPO Y TECNOLOGÍA

Desde su creación, en 1957, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, contra viento y marea, logró sobrevivir a las sucesivas crisis políticas y sociales que atravesó nuestro país, constituyéndose en un modelo de investigación e incentivo de la producción nacional.

Javier Vogel

Es periodista egresado de TEA. Cursó la Maestría en Periodismo Político de la UNLP. Colabora en el diario la Voz del Interior, de Córdoba. Entre 2009 y 2016 compartió la conducción del ciclo *Viaje al Centro de la Noche*, en Radio América, AM 1190.

Tras su llegada a la Presidencia en 1946, Juan Domingo Perón creó el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias desde donde se propuso impulsar el desarrollo del sector. Dos años antes, el entonces coronel, a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, había implementado por decreto el Estatuto del Peón Rural, lo que le había hecho ganar el rechazo de pequeños, medianos y grandes productores. Cuando en diciembre de 1946 Perón hizo que el Congreso lo convirtiera en Ley, aquellos propietarios rurales ratificaron su enemistad con el líder justicialista.

En 1956, un año después del golpe que puso en la Casa Rosada a Eduardo Lonardi y poco tiempo después a Pedro Eugenio Aramburu, el economista Raúl Prébisch elaboró un informe de situación que sostenía que el campo argentino vivía una situación de atraso tecnológico y recomendaba crear un instituto público que permitiera recuperar el sector.

El Informe Prébisch sugería un organismo con autarquía económica que pudiera subsistir más allá de las incertidumbres políticas. En 1957 nació el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que para 1968 ya contaba con 200 agencias, 925 profesionales y 3400 trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional.

Medio siglo después, habiendo sobrevivido a más de una crisis profunda, el INTA cuenta con una sede central, 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 6 centros de investigación, 22 institutos de investigación y más de 350 Unidades de Extensión.

La memoria

En 2007 Nicolás Prividera dirigió la película *M*, un documental en el que el director indaga acerca del destino de su madre, la bióloga Marta Sierra, una trabajadora del INTA Castelar secuestrada y desaparecida en 1976.



Marta alfabetizaba a personas en una escuela para adultos que funcionaba dentro del INTA. “En la medida que daban clases, enseñaban también cómo era el proceso social, pero a tu madre nunca la vi con un arma”, le dice un ex compañero. “Cuando vino el golpe, los militares enseguida vinieron a la escuelita porque pensaban que era un foco subversivo”, suelta otro.

Marta Sierra fue secuestrada en su casa en la madrugada del 30 de marzo de 1976. Un día antes habían ido a buscarla al INTA Castelar, pero no la encontraron porque estaba con licencia, tras el nacimiento de Guido, su segundo hijo. En su legajo, Marta figuraba como administrativa porque cuando ingresó al organismo, aún no se había recibido de bióloga.

Posteriormente, integró el equipo de Ecología, un grupo que a partir de 1975 fue desarmado y sus integrantes derivados a otras áreas o perseguidos.

En marzo de 2014 las autoridades INTA y Conicet firmaron una carta de intención para impulsar líneas de investigación conjuntas que permitieran medir las consecuencias de la dictadura en las políticas del Instituto, dentro del sector agropecuario y agroindustrial.

Para entonces Guido, aquel hijo recién nacido de Marta ya había ingresado al INTA con su título de sociólogo para desarrollar tareas en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF). “Cuando entré yo, en 2005, en el INTA no había jóvenes, la planta estaba totalmente envejecida.

Tampoco había vehículos ni presupuesto, era un monstruo dormido que sobrevivía o funcionaba con financiamiento externo”, relata Guido, quien además de especializarse en temas ligados a la agricultura familiar, impulsó la creación de la Comisión de Reparación Histórica del INTA.

El grupo, que trabajó junto a la Universidad Nacional de San Martín en el análisis y clasificación de información referida a desapariciones, asesinatos y cesantías durante la dictadura, está integrado también por Fabiana Bigi, una bióloga que en 1992 ingresó al INTA para realizar investigación básica y aplicada.

Su padre, Jorge Alberto Bigi fue un abogado que dejó de ejercer la profesión para militar en la JTP (Juventud de Trabajadores Peronistas) y que llegó a ser director de la Sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta.

Fabiana, quien trabaja en la creación de vacunas contra la tuberculosis bovina en el Centro de investigación de Castelar, ve con tristeza cómo la Comisión de Memoria va perdiendo día a día el apoyo institucional con el que contó en años anteriores.

Un pilar fundamental de la recuperación histórica es la investigadora Cecilia Gárgano, autora de *El otro campo* y compiladora de *Ciencia y Dictadura*, una investigación en la que, junto a otros autores, analizó “la reestructuración selectiva de los contenidos, objetivos y destinatarios de las agendas de investigación y extensión del INTA, íntimamente ligada a los efectos de la reestructuración económica operada en el período”.

También estudió la introducción de mecanismos represivos y “el proceso de hiper fragmentación y de mercantilización del conocimiento producido en el organismo”.

Modelo de transferencia

Guido Prividera explica que el modelo científico nacional, que también impera en el INTA, se mantiene con instancias de investigación y desarrollo tecnológico que posteriormente se transfieren a empresas privadas. ¿Por qué esto funciona así? “Porque hay investigaciones que los privados no van a hacer, pero que, si queremos desarrollar el país, es necesario que el Estado aporte y empuje. Las agencias de extensión hacen eso”.

El modelo de transferencia tiene características que se explican en las investigaciones de Gárgano y a la vez permiten entender las palabras del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien en los primeros días de junio confirmó un rumor que preocupa a un sector de trabajadores del INTA: la creación de un Polo Tecnológico que albergará a empresas privadas en el INTA Castelar.

“Tenemos que concretar ese lugar físico para la agroindustria, para nosotros y el mundo”, plantó Etchevehere, un dirigente que, hasta el momento de asumir como ministro, se desempeñó como presidente de la Sociedad Rural Argentina, llegando al cargo para celebrar la eliminación de las retenciones al trigo y al maíz, y la baja del 5 por ciento a la soja.

Durante el mismo discurso, Etchevehere sostuvo que los tres ejes de su gestión son “la desburocratización, la competitividad y la apertura de mercados”. Ahora, los más pesimistas ven en el anuncio del ministro un negocio inmobiliario, y el espacio para que los privados accedan con menores costos al trabajo que se desarrolla desde el Estado.

Se trata de investigaciones de una utilidad probada en la relación con los productores de todo el país y que permiten, por ejemplo, detectar anomalías madurativas en cultivos que pudieran dificultar las labores de cosecha, aumentar los estándares de calidad de frutas o eliminar plagas sin recurrir a plaguicidas tradicionales.

De los laboratorios del INTA salen nuevas variedades de algodón y se modifican los genes que oxidan las papas, entre otras tareas de investigación.

La calidad profesional ubica al organismo en un lugar de prestigio. Así es como en abril de este año, el INTA asumió la vicepresidencia de la Red Latinoamericana de Laboratorios de Suelos, que funciona integrada a un sistema de información global que impulsa la Alianza Mundial de Suelos de la FAO.

El fantasma de Sigfrido Kraft

Durante uno de sus estudios históricos, Cecilia Gárgano fijó la mirada en el caso de Sigfrido Kraft, quien en agosto de 1959 ingresó al INTA con una beca para investigación aviar. El hombre centró su labor alrededor de las comunidades desplazadas tras la retirada de La Forestal, la explotación de quebracho que desmontó el Noreste de Santa Fe, el Este de Santiago del Estero y el Sur del Chaco. Su objetivo era desarrollar razas de aves que se adaptaran bien a los alimentos accesibles en el lugar, como el sorgo antipájaro, un cereal que contiene mucho tanino y resulta muy difícil de digerir para las aves.

“Había que conseguir un pollo que comiera algo que hasta ese momento no le gustaba, o le caía mal. Teníamos que lograr que aguantaran el tanino y lo conseguimos porque en la biología siempre hay genes dormidos que resultan útiles cuando hace falta”, recordó Kraft en marzo de 2013, durante una entrevista que le hizo Gárgano en la ciudad de Río Cuarto.

Si bien con las primeras camadas de animales, apenas

el veinte por ciento reaccionaba positivamente ante esos alimentos, cinco años más tarde, con el paso de cuatro o cinco generaciones de aves, ocho de cada diez pollos toleraban la comida.

El investigador buscaba aves genéticamente resistentes a la coccidiosis, una enfermedad intestinal que provoca diarreas sanguinolientas en pollos y gallinas. El trabajo avanzaba con buen ritmo y Kraft presentó la experiencia en un Congreso Internacional de Alimentación Animal, en Maryland (EEUU), en junio de 1968. A partir de ahí, las dificultades y las advertencias se hicieron cotidianas. Su trabajo había despertado malestar tanto en los importadores de líneas genéticas aviares como en las empresas químicas que vendían fármacos para tratar la coccidiosis.

En la entrevista que puede verse en la red social YouTube, Kraft recordó que los laboratorios y los importadores de pollos bebés buscaron “impedir que la Argentina tuviera líneas genéticas propias. Era una cuestión de independencia nacional porque cualquiera que desarrolle la producción de alimentos tiene en sus manos un arma que puede usarse a favor del bienestar de la comunidad”. Y lo lograron.

Con el golpe cívico militar de 1976, llegaron la intervención al INTA, la cesantía de Kraft, la prohibición de ingresar al organismo y una persecución que lo privó de trabajo durante los siguientes cuatro años. Los corrales fueron destruidos y los 1200 animales con los estaba trabajando en ese momento, sacrificados.

Lo que le pasó a Kraft no fue un caso aislado. Gárgano explica en sus textos que “durante los primeros años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se introdujeron cambios significativos que acompañaron y promovieron la concentración del sector”. En sus trabajos, la historiadora recupera piezas periodísticas que muestran la mirada sobre la realidad y el organismo. El 29 de octubre de 1976, el diario La Nación publicó una nota titulada “La recuperación del INTA”, en la que sostenía que “en años recientes (el organismo) fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica que utilizó los centros de estudio y de difusión para sus disolventes actividades”.

Pero la caza de brujas había empezado antes del golpe. El 13 de octubre del '75, La Nación publicó el editorial “La situación en el INTA”. Allí planteaba los problemas que acarrearía haber incrementado la planta de personal y el peligro de “la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado”.

La sombra del pasado

Guido Prividera es un entusiasta defensor de la agricultura familiar: “En la explotación agrícola ganadera hay tres factores de producción que son: tierra, trabajo y capital. El dueño de la tierra quiere una renta por su uso, el capitalista, que puede ser un pool de siembra o un grupo inversor, busca una ganancia y los trabajadores requieren un salario. En un formato de producción familiar, terrateniente, capitalista y trabajador son la misma unidad productiva, lo que les permite subsistir y sobrellevar momentos de crisis.

En 2007 Nicolás Prividera dirigió la película *M*, un documental en el que el director indaga acerca del destino de su madre, la bióloga Marta Sierra, una trabajadora del INTA Castelar secuestrada y desaparecida en 1976.

“Los *pooles* de siembra, en cambio –continúa Guido–, si no cubren sus expectativas con la tasa de ganancia, se van a invertir en acciones de la Bolsa porque al capital financiero no le importa ni la soja ni la tierra. Ellos buscan la mayor tasa de rentabilidad”.

Detrás del anuncio de Etchevehere y de sus banderas de desburocratización, competitividad y apertura, lo que subyace es una posición que sólo elige mirar los números macro.

“Para la visión neoliberal, si la reducción de gastos que proponen implica que muera gente, se pierda ciencia o tecnología, o que se fuguen cerebros, son temas secundarios”, se lamenta Prividera. El problema que ve el investigador es que cuando se reduce el presupuesto para los proyectos de extensión, la lógica pasa a ser de financiamiento externo, algo que ya sucedió en la década del noventa, con pésimos resultados para el país. “En esos años, Castelar era tierra arrasada. Sobrevivían los grupos de investigación que tenían apoyo externo, pero las prioridades se medían en función del interés de quien pone la plata y así se pierde autonomía para definir las prioridades”. ■